



S!Paz



INFORME
VOL.
XXX
Nº 4
DIC
2025

SIPAZ 30 años: Difusión comunitaria
en el evento por la libertad de Alberto
Patishtán. El Bosque, marzo de 2017
© SIPAZ

EN ESTE NÚMERO :

ACTUALIDAD:

México
**Los derechos humanos,
grandes ausentes en el primer
informe de la presidenta
Claudia Sheinbaum**

ENFOQUE:

SIPAZ
**30 años acompañando la
construcción de una paz
verdadera en México**

ARTÍCULO:

Luces de esperanza
**Jóvenes construyendo paz en
el mundo**

ACTIVIDADES DE SIPAZ:

**De mediados de agosto a
mediados de noviembre de
2025**

3

9

17

20



Junta Directiva de SIPAZ

Gustavo Cabrera - *Presidente*

Servicio Paz y Justicia en
América Latina, Costa Rica

Richard Stahler-Sholk - *Tesorero*

Estados Unidos

Rev. Denise Griebler - *Secretaria*

Mayan Ministries, Estados Unidos

Josefine Sjöberg

Movimiento Sueco por la
Reconciliación (SweFOR), Suecia

Jenny Nemes

Colombia

Paula Bidle Moore

Illinois, Estado Unidos

SIPAZ es un programa de observación internacional nacido en 1995, después del levantamiento armado zapatista en 1994, para monitorear el conflicto de Chiapas, México.

SIPAZ surgió de la petición realizada por líderes religiosos y organizaciones de derechos humanos de México a una delegación internacional que visitó Chiapas en 1995. A partir de la demanda de una presencia internacional permanente en la región decidieron crear una coalición de distintas organizaciones de los Estados Unidos, Europa y América Latina cuyo denominador común fuera su preocupación por la situación en Chiapas.

Hoy en día, SIPAZ apoya la búsqueda de soluciones pacíficas y la construcción de una cultura de paz, diálogo y tolerancia entre actores en Chiapas y de forma creciente, en otros estados de México (Oaxaca y Guerrero). Al mismo tiempo, sirve de puente de comunicación e intercambio entre organizaciones y redes que trabajan por la construcción de una paz justa y verdadera a nivel local, nacional, regional e internacional ■

El Equipo Internacional de SIPAZ en Chiapas:

- Tiene una presencia internacional y acompaña procesos en la construcción de una cultura de la paz en México.
- Informa a través de una comunicación confiable que involucra a los actores y moviliza la comunidad local, nacional e internacional en la búsqueda de las respuestas alternativas a las causas de la violencia en el país.
- Se articula con las organizaciones, movimientos y redes para compartir y fortalecer procesos de construcción de cultura de paz.
- Mantiene contacto e interlocución con los actores presentes en el conflicto en todas sus expresiones.

SIPAZ reconoce y respeta los principios de no intervención y soberanía del Estado mexicano y de sus ciudadanos, de quienes debe depender la iniciativa para alcanzar la solución a los conflictos.

Los miembros de la coalición de SIPAZ tienen muchos años de experiencia en transformación de conflictos y construcción de la paz, mediante iniciativas internacionales y no gubernamentales. A partir de esta experiencia, SIPAZ busca jugar un papel de facilitador que fortalezca el contexto en el que los mexicanos están trabajando ■



Calle Las Flores #1,
Barrio de San Diego
CP 29270, San Cristóbal
de Las Casas
Chiapas, México

(+52.967) 631 60 55

chiapas@sipaz.org
www.sipaz.org



sipaz.chiapas



@sipazchiapas

Miembros de la coalición de SIPAZ

Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA) (Argentina)

Baptist Peace Fellowship of North America (North Carolina, EEUU)

Benedictine Sisters of Erie (Pennsylvania, EEUU)

Capacitar (California, EEUU)

CAREA (Berlin, Alemania)

Carolina Interfaith Task Force on Central America (N. Carolina, EEUU)

Catholic Conference of Major Superiors of Men's Institutes

Peace and Justice Committee (Washington DC, EEUU)

Centro Memorial Dr. Martin Luther King Jr. (La Habana, Cuba)

Christian Peacemaker Teams (Illinois, EEUU)

Church of the Brethren (Washington DC, EEUU)

Dominican Sisters of San Rafael (California, EEUU)

Episcopal Peace Fellowship (Washington, DC, EEUU)

Fellowship of Reconciliation/EEUU (New York, EEUU)

FOR Austria (Austria)

Franciscan Friars, Santa Barbara Province (California, EEUU)

Franciscan National Justice, Peace and Ecology Council

(Washington DC, EEUU)

Global Exchange (California, EEUU)

IF/ When (California, EEUU)

Illinois Maya Ministry, United Church of Christ (Illinois, EEUU)

Iniciativa Ecuémica «Oscar Romero» (CIPFE, Montevideo, Uruguay)

International Committee for the Peace Council (Wisconsin, EEUU)

International Fellowship of Reconciliation (Alkmaar, Holanda)

Jubilee Economics Ministries (EEUU)

JustaPaz (Bogotá, Colombia)

Kentucky Interfaith Taskforce on Central America (EEUU)

Leadership Conference of Women Religious (Washington, DC, EEUU)

Loretto Community Latin America / Caribbean Committee (Colorado, EEUU)

Marin Interfaith Task Force on the Americas (California, EEUU)

META Peace Team (Michigan, EEUU)

Movimiento Ecuémico de Elecciones 2024 (Buenos Aires, Argentina)

National Benedictines for Peace (Pennsylvania, EEUU)

Pax Christi (Pennsylvania, EEUU)

Pax Christi International (Bruselas, Bélgica)

Peace Brigades International (Londres, Inglaterra)

Peaceworkers (California, EEUU)

Presbytery of Chicago (Illinois, EEUU)

Racine Dominican Sisters (EEUU)

Resource Center for Nonviolence (California, EEUU)

Servicio Paz y Justicia de América Latina (Montevideo, Uruguay)

Sojourners (Washington, DC, EEUU)

Southeastern Yearly Meeting of the Religious Society of Friends

(Florida, EEUU)

SweFOR (Suecia)

Unitarian Universalist Service Committee (Massachusetts, EEUU)

Washington Office on Latin America (WOLA) (EEUU)

Western Dominican Province (Arizona, EEUU)

Witness for Peace (Washington DC, EEUU)



México Los derechos humanos, grandes ausentes en el primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum

El 1º de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó su Primer Informe de Gobierno. Entre los logros, destacó que México quedó mejor posicionado que otros países frente a los nuevos aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump: *“México es el país con el menor porcentaje de tarifas arancelarias en promedio en el mundo y continuamos trabajando con las distintas secretarías de Estado de nuestro país vecino. Estamos convencidos de que, en el marco del Tratado Comercial, podemos alcanzar aún mejores condiciones”*.

En elementos nacionales, la presidenta destacó también la aprobación de reformas constitucionales y leyes, incluyendo la reforma al Poder Judicial, la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional; la reforma al artículo 2 para el reconocimiento de los pueblos indígenas y afroamericanos como sujetos de derecho público; y las reformas para recuperar a Pemex y la Comisión Fede-

ral de Electricidad (CFE) como empresas públicas. Presentó cifras sobre el crecimiento económico y los avances de varios proyectos emblemáticos, así como la cobertura de los programas sociales. En materia de seguridad, presumió reducciones en el homicidio doloso, los delitos de alto impacto y los feminicidios, aunque admitió amenazas como el crimen organizado, el lavado de dinero, la migración irregular, el tráfico de drogas, ciberataques y el robo de hidrocarburos.

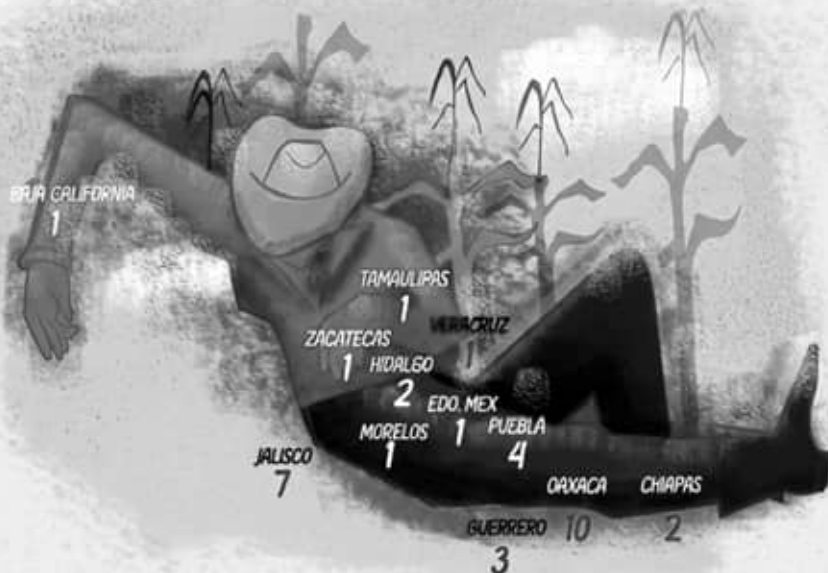
Derechos humanos: el gran ausente del informe

“Para una administración que busca distanciarse de gobiernos neoliberales y que se presenta como promotora de los derechos sociales, la soberanía, la libertad y la democracia, es desconcertante que se haya desdeñado los derechos humanos en su integralidad en este primer gran informe”, declaró el Centro de Derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH). Si bien rescató avances en materia de de-

rechos sociales (vivienda, derechos de los pueblos indígenas, derechos de las mujeres), señaló *“grandes retrocesos en materia de derechos civiles y políticos”*. En particular, expresó que *“sobre la Reforma Judicial, hay que decirlo: la nueva era de la judicatura empieza con la independencia puesta en entredicho”*, mientras *“las fiscalías —verdadera fuente central de impunidad— permanecen intactas”*. En cuanto a la reforma que permitió la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, el PRODH afirmó que *“se confirma la profundización de la militarización de la seguridad pública sin contrapesos civiles”*. Asimismo, dijo que *“lo más preocupante (...) tiene que ver con (...) los grandes agravios a las víctimas en el país, en particular los relacionados con la grave crisis de desapariciones (...), solo se hizo una*

Claudia Sheinbaum presentó su primer informe de gobierno en México. 1º de septiembre de 2025, Palacio Nacional
© defonline.com.ar

TODOS SUS NOMBRES TODAS SUS LUCHAS



**34 PERSONAS DEFENSORAS ASESINADAS
OCTUBRE 2024-2025**

34 personas defensoras de derechos humanos asesinadas entre octubre de 2024 y octubre de 2025
© EDUCA

mínima referencia a reformas normativas —que no han sido suficientes para abordar la crisis— y no así a la grave crisis de más de 130 mil personas desaparecidas y de los compromisos para revertirla. “Tampoco se hizo ninguna referencia al tema de derechos humanos en general. En suma, como se ha expresado en diversas ocasiones desde la tribuna presidencial: lo que no se nombra, no existe”, afirmó.

Igualmente, en septiembre, tras la elección popular celebrada en junio, la mitad del Poder Judicial Federal tomó posesión de su cargo, mientras que la otra mitad se elegirá en 2027. Este mismo día, Human Rights Watch (HRW) declaró que “la reforma constitucional que sustituye a la mitad del poder judicial federal por jueces elegidos por voto popular ha socavado la independencia judicial en México”. “Lejos de ser un esfuerzo por hacer que el poder judicial sea más democrático y eficiente,

es probable que esta reforma solo cree un poder judicial leal al gobierno”, dijo.

Posteriormente, en octubre, colectivos de familiares de personas desaparecidas, organizaciones, activistas y académicos presentaron ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED), en Suiza, un informe sombra titulado “Desapariciones generalizadas y/o sistemáticas cometidas en México”. El informe señala que en todo el país hay desapariciones y que muchas de ellas fueron cometidas por autoridades del Estado, como militares, policías y fiscales, en el marco de la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Según los datos, entre 2017 y 2025, solo hubo 373 condenas por desaparición forzada, menos del 1 % de los casos. Además, denunciaron que existen más de 72 mil cuerpos sin identificar y miles de fosas clandestinas en el país. Finalmente, los colectivos y organizaciones pidieron la intervención inter-

nacional para detener esta tragedia, pues consideran que México vive la peor crisis de desapariciones de toda América Latina.

El CED activó el artículo 34º de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, un procedimiento que abre la posibilidad de dar intervención a la Asamblea General de Naciones Unidas. Es la primera vez que se aplica a un Estado parte. Ante ello, la presidenta Claudia Sheinbaum ha acusado “mucho desconocimiento” por parte del Comité de la ONU, y ha asegurado que este fenómeno está vinculado principalmente con la delincuencia organizada. Por su parte, el representante permanente de México ante la ONU, Héctor Vascócelos y Cruz, rechazó la medida. “La aplicación de dicho artículo debe reservarse a situaciones excepcionales”, declaró. Ante ello, Amnistía Internacional recordó al Estado mexicano que las cifras de personas desaparecidas, la impunidad y la vulnerabilidad de las familias buscadoras no son normales, son “situaciones excepcionales”.

En noviembre, en el marco de Día de Muertos, fue publicado el monitoreo “Todos sus Nombres, Todas sus Luchas 2025”, el cual concluyó que, en el periodo que abarca del 1º de octubre de 2024 hasta el 24 de octubre de 2025, no se observó “ni cambio ni transformación: continúa la represión y la violencia letal contra personas defensoras”. Dicho monitoreo permitió documentar 34 asesinatos de personas defensoras y 4 desapariciones forzadas en este plazo. Tierra, verdad y justicia son las causas que generan más agresiones (76,3 %). Asimismo, se identificó como eje de preocupación la violencia ejercida contra personas pertenecientes a colectivos de búsqueda de personas desaparecidas (26,3 % de los casos registrados). El 44,1 % de los asesinatos de personas defensoras se concentran en el sur-sureste del país (Oaxaca 10, Guerrero 3, Chiapas 2). Los poderes fácticos siguen siendo los principales responsables de los atentados contra la vida (71,1 %), mientras que en el 18,4

% de los casos, no se cuenta con información precisa sobre los hechos.

Inseguridad y crimen organizado: otro de los grandes pendientes

En noviembre, el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo —conocido por su postura firme contra el crimen organizado— generó conmoción nacional. El autor material, un joven de 17 años identificado como recluta del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), utilizó un arma que resultó vinculada a otros hechos violentos recientes. El ataque se interpretó como un golpe a las autoridades locales y al Estado de derecho, ya que el hecho de que un alcalde, pese a contar con protección policial y de la Guardia Nacional, haya sido asesinado públicamente subraya la debilidad del Estado frente al crimen organizado.

Este hecho provocó condena y manifestaciones tanto a nivel de Michoacán como nacional. Ante la violencia y la impunidad, ciudadanos exigen justicia y responsabilizan a las autoridades estatales y federales por la inseguridad. El efecto intimidatorio para otros políticos es obvio: si un alcalde con el perfil de Manzo es eliminado, ¿quién más se atreverá a enfrentarlos?

En respuesta, el gobierno federal lanzó un plan de seguridad (*“Plan Michoacán por la Paz y Justicia”*) con despliegue militar, más de 10.500 elementos y una inversión millonaria. La iniciativa se presentó como un posible punto de inflexión, con más control militar y una presencia reforzada del Estado; sin embargo, también entraña riesgos: una estrategia centrada casi exclusivamente en lo securitario, sin atender causas estructurales (pobreza, reclutamiento de jóvenes por los carteles), corre el riesgo de resultar insuficiente o incluso contraproducente. La administración de Claudia Sheinbaum enfrenta una prueba importante: debe demostrar que puede garantizar seguridad y justicia, especialmente después de un crimen tan mediático. Si el plan de pacificación



no ofrece resultados tangibles, el costo político podría ser considerable.

CHIAPAS: “la paz ha llegado” a Chiapas, afirma el gobernador en medio de crecientes reclamos por inseguridad y la falta de justicia

En octubre se realizó una conferencia de prensa con representantes de la Plataforma para la Construcción de Paz en México. Denunciaron la discrepancia entre el discurso oficial sobre la “paz” y la realidad que se vive en Chiapas y en todo el país, marcada por la violencia y por problemas estructurales que siguen sin resolverse. La Plataforma señaló que, mientras el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, promovía una marcha bajo el lema *“la paz que ha regresado”* en Chicomuselo, miles de integrantes del Pueblo Creyente de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas peregrinaron en San Andrés Larráinzar para recordar al padre Marcelo Pérez Pérez, asesinado por su lucha por la justicia en octubre de 2024. *“Vemos acciones de contención más que solución. Vemos comunidades desplazadas, sin condiciones de seguridad para regresar a sus*

territorios debido a la presencia de grupos delictivos. Vemos víctimas que no se atreven a denunciar por miedo a represalias, lo cual pone en tela de juicio las declaraciones gubernamentales en el sentido de que Chiapas se ha vuelto el segundo lugar más seguro del país. Además, varias de las acciones que se llevaron a cabo conllevaron violaciones a derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias y tortura”, denunciaron. Recordaron que la paz verdadera no puede construirse desde la contención ni desde el silencio, sino a partir de la verdad, la justicia, la reparación y la participación activa de las comunidades.

La peregrinación en San Andrés y sus demandas no constituyen voces aisladas. En agosto, pobladores de la zona Chol peregrinaron por la paz en Palenque. *“Nos unimos al clamor de nuestras comunidades para denunciar las injusticias que viven nuestros pueblos, sobre todo la inseguridad y la violencia que atenta contra la vida”,* expresaron. *“Somos conscientes de que no podemos tener paz en nuestro estado (...), mientras exista violación a los derechos humanos, violencia, delincuencia, inseguridad, hermanos y*

Peregrinación para conmemorar el primer aniversario del asesinato del sacerdote tsotsil Marcelo Pérez, San Andrés Larráinzar, octubre de 2025
© SIPAZ



Actividades en Tuxtla Gutiérrez en el marco del Día Internacional de los desaparecidos, agosto de 2025
© SIPAZ

hermanas vulnerados en sus derechos fundamentales”, plantearon.

También, en agosto, cientos de católicos realizaron una peregrinación en Venustiano Carranza. Denunciaron que el crimen organizado sigue generando violencia y el desplazamiento forzado de comunidades enteras debido a la negación de su existencia de parte de las autoridades federales y estatales. Manifestaron que los enfrentamientos entre grupos del narcotráfico continúan causando secuestros, desapariciones, heridos y asesinatos.

En septiembre, el Centro de Derechos Humanos de la Selva Negra cuestionó las narrativas oficiales sobre avances en seguridad, reducción de la pobreza y transformación. *“El cáncer de la criminalidad ha llegado a la médula de los territorios”,* expresó. También cuestionó la creación de la unidad de élite Fuerza de Reacción Inmediata Pakal: *“Ha dejado en las comunidades en las que ha pasado, invasión a sus territorios, allanamiento en propiedades privadas sin orden judicial e intimidación a la población”,* declaró. También

condenó los megaproyectos de infraestructura y turismo.

Varias preocupaciones adicionales en materia de derechos humanos

En agosto, el gobierno de Guatemala informó que concedió permisos de permanencia por razones humanitarias a 161 ciudadanos chiapanecos en busca de refugio frente a la violencia generada por grupos del crimen organizado. Se trata de 39 familias, con 69 menores de edad, originarias de comunidades del municipio de Frontera Comalapa. El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, negó que en el estado existan desplazamientos forzados por la violencia del crimen organizado, afirmando que estas versiones forman parte de un intento por desacreditar su estrategia de seguridad. El fiscal general estatal, Jorge Luis Llaven Abarca, señaló que las personas desplazadas lo hicieron de forma voluntaria, argumentando que posiblemente tendrían algún vínculo familiar con personas generadoras de violencia, sujetas a órdenes de aprehensión. *“Hoy se puede ir a cualquier parte de la Sierra sin ningún problema, porque hay presencia institucional de todas las fuerzas*

del orden. La paz y la tranquilidad de Chiapas están garantizadas”, dijo.

El 30 de agosto, se visibilizó otra problemática que afecta Chiapas en forma creciente: la de las desapariciones. Se llevaron a cabo dos acciones: por un lado, una convocada por el Grupo de Trabajo Contra la Desaparición en Chiapas que declaró que *“a diferencia de otras regiones de América Latina, en México la desaparición de personas no es un problema del pasado, sino una crisis que se agudiza año tras año”*; y, por otro, una marcha coordinada por la colectiva Madre en Resistencia que exigió *“al gobernador Eduardo Ramírez y al fiscal Jorge Luis Llaven Abarca que hagan investigaciones concretas, que realmente busquen a nuestros familiares y que no sea solo simulación. Muchas familias no se atreven a salir por miedo a represalias, pero solo unidas podremos presionar para que hagan su trabajo”,* puntualizaron.

En septiembre, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) informó sobre *“las estrategias de cercamiento y despojo del territorio recuperado por la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), llevadas a cabo en el Poblado Autónomo Zapatista Belén, (...), municipio oficial de Ocosingo”*. Entre los ataques se incluyen *“negación al diálogo, incursión y medición del territorio autónomo recuperado en 1994, amenazas, robo de cosechas, quema de dos casas, y despojo”*. Estos hechos habrían sido perpetrados por *“un grupo de civiles junto con la policía municipal de Ocosingo, Policía Estatal, Delegado de Gobierno, Fiscalía General del Estado de Chiapas, y efectivos del Ejército mexicano”*. Según Frayba, los recientes ataques y hostigamientos en territorios zapatistas constituyen la continuidad de una estrategia del Estado mexicano para despojar tierras y confrontar al EZLN, poniendo en riesgo la vida de la población.

En octubre, el Observatorio de Personas Defensoras de Derechos Humanos en Chiapas informó que registró 79 agresiones contra defensoras, defensores y periodistas durante el primer semestre del año 2025 en el esta-

do, un aumento de 29 % respecto del mismo periodo de 2024. El 62 % fueron agresiones físicas y el 38 % digitales. Los 79 incidentes registrados suponen un promedio de 11 incidentes violentos por mes.

OAXACA: Agresiones a personas defensoras y otras preocupaciones en derechos humanos

La campaña permanente Alas y Raíces de los Movimientos Sociales en Oaxaca ha documentado que, en los primeros dos años y medio de la actual administración estatal, se registraron 44 personas defensoras agredidas individualmente y 70 actos de agresiones colectivas. Un aspecto preocupante que sobresale en este monitoreo es que el 50 % de todas las agresiones registradas se relacionan con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), un proyecto que ha catalizado las agresiones contra personas defensoras en la región. Según este mismo monitoreo, las respuestas gubernamentales para darle solución a la conflictividad se han caracterizado por omisión, provocaciones o administración de los conflictos en un total de 81% de estos casos.

También se registraron 149 acciones de resistencia, así como estrategias y alternativas emergentes, para enfrentar el escenario de conflictividad y violencia: *“Si por algo se caracteriza Oaxaca es por su fuerza organizativa y creatividad de formas de resistencias”*, procesos que se organizan en un contexto marcado por el aumento de los conflictos por el control de la tierra y territorio, el incremento de medidas de seguridad nacional y la militarización en el país, así como por la expansión de estructuras criminales y mercados ilícitos cada vez más visibles y violentos.

Otra tendencia observada durante la administración de Salomón Cruz Jara ha sido la creciente criminalización de la protesta. En este sentido, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) ha registrado un número significativo de



Manifestación
contra los
feminicidios
en Oaxaca
© Consorcio Oaxaca

quejas contra la policía: hasta julio de 2025 se habían iniciado 137 quejas. Esto sugiere un problema en la actuación de fuerzas de seguridad, incluyendo abusos, malos tratos y violaciones de derechos humanos.

Otro aspecto relevante que las organizaciones civiles del estado han señalado como parte de una crisis de derechos humanos, ha sido la creciente desaparición de personas. En agosto, colectivos de búsqueda y organizaciones civiles marcharon en la capital de Oaxaca, para denunciar la insensibilidad y la indiferencia de las autoridades. Urgieron la creación inmediata de una Fiscalía Especializada en Desapariciones en Oaxaca, con autonomía plena, presupuesto suficiente, personal capacitado y con perspectiva de derechos humanos, género e interculturalidad. Asimismo, señalaron que es importante impulsar un programa efectivo de búsqueda, que derive en acciones concretas de prevención, búsqueda inmediata, localización y acompañamiento integral a las familias. En los últimos tres años, el número de personas desaparecidas en Oaxaca ha aumentado un 81,8%, la

mayoría hombres jóvenes entre 15 y 34 años.

Un último aspecto a enfatizar: de acuerdo con el Observatorio de Feminicidios del Grupo de Estudios para la Mujer Rosario Castellanos, en lo que va del 2025 se han registrado 64 muertes violentas de mujeres en Oaxaca, el 62% de ella tipificadas como feminicidios. Durante la administración actual del morenista, Salomón Jara Cruz —2022 a septiembre, 2025—, se han registrado un total de 267 muertes violentas de mujeres. A pesar de que desde hace siete años se activó la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género en 40 municipios de Oaxaca, no se observan cambios profundos.

GUERRERO: Violencia criminal y desapariciones

En septiembre, durante el 11º aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, madres y padres denunciaron que, pese a la expectativa de una *“transición democrática”*, siguen exigiendo verdad y justicia. En Guerrero y en la Ciudad de México se realizaron marchas para reiterar cuatro demandas centrales: esclarecer los hechos, extraditar a actores clave involucrados, acceder a los



800 folios de investigación aún clasificados y reanudar búsquedas de campo. Aunque hubo un cambio en la titularidad de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), el Comité de Madres y Padres denunció que el gobierno de Claudia Sheinbaum no ha tenido resultados. La falta de avances se refleja también en las búsquedas en terreno, restringidas por la ausencia de hallazgos y por la reducción de personal debido a recortes presupuestales.

El caso Ayotzinapa es solo la punta del iceberg de la crisis de desapariciones en Guerrero. En agosto, colectivos de familiares, víctimas de violencia y defensores marcharon en Acapulco y Chilpancingo por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones. Exigieron a las autoridades la búsqueda de aproximadamente 4.500 personas desaparecidas, cifra que coloca a Guerrero como la quinta

entidad con más casos en el país. También demandaron la identificación de los cuerpos acumulados en Servicios Médicos Forenses saturados, así como el cumplimiento de las exigencias planteadas desde 2017: una ley estatal en materia de desaparición que permita crear un centro de identificación genética y otorgar autonomía presupuestal a las comisiones estatales de búsqueda y atención a víctimas.

La omnipresencia del crimen organizado constituye el trasfondo indispensable para entender la magnitud de estas problemáticas y la impunidad persistente. En octubre, autoridades y policías comunitarios del CIPOG-EZ y de la CRAC-PC-PF fueron atacados por el grupo criminal Los Ardillos, informó el Consejo Nacional Indígena (CNI). El enfrentamiento dejó tres policías comunitarios muertos y siete heridos. Las comunidades

acusaron a los agresores de operar con apoyo y protección de las autoridades. Han sufrido violencia narco-paramilitar durante años: en la última década, 66 personas han sido asesinadas y 23 desaparecidas.

Ese mismo mes, periodistas de distintos medios de Iguala pidieron la intervención de la presidenta Sheinbaum tras denunciar amenazas de muerte del crimen organizado si publicaban información sobre el atentado contra el abogado y activista Anselmo Bautista Martínez, quien falleció a causa de la agresión. Bautista había sido atacado pocos días después de presentar ante la Fiscalía de Guerrero una denuncia contra dos agentes del Ministerio Público por diversos delitos. Conocido por revelar casos de corrupción judicial y por su trabajo con colectivos de familias de desaparecidos, su asesinato generó temor adicional entre reporteros, que advirtieron que las presiones del crimen organizado afectan a periodistas en numerosas zonas del estado, no solo en Iguala.

Finalmente, en octubre, más de 300 personas se reunieron en Mezcala, municipio de Eduardo Neri, para despedir al sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, quien estuvo desaparecido hasta que su cadáver fue localizado. Durante la ceremonia, el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, denunció que hoy existen comunidades en Guerrero donde los sacerdotes no pueden entrar. Señaló que la presencia de grupos criminales impone restricciones incluso a figuras religiosas, evidenciando hasta qué punto se ha deteriorado la seguridad y el control territorial que ejercen estas organizaciones ■

COLABORE ECONÓMICAMENTE CON SIPAZ

Su contribución hace posible que SIPAZ continúe ofreciendo observación y presencia internacional en las regiones de Chiapas, Oaxaca y Guerrero

En Europa:

A la cuenta de SIPAZ en Holanda
Nombre del Banco: ING Bank
A nombre de "Servicio Internacional para la Paz"
BIC: INGBNL2A
IBAN: NL75INGB0004602969

En América del Norte:

SIPAZ, INC.
3849 17th Ave S.
Minneapolis, MN 55407, USA
E-mail: info_sz@sipaz.org
Tel.: (+1.530)-892-0662

Para donar en línea ingrese a nuestro sitio Web:

www.sipaz.org



SIPAZ, 30 años acompañando la construcción de una paz verdadera en México

Nacimiento en un momento histórico convulso

Acompañamiento
a la caravana
“El Sur resiste”,
coordinada por el
Congreso Nacional
Indígena (CNI),
mayo de 2023
© SIPAZ

Este 2025, SIPAZ - Servicio Internacional para la Paz, celebra tres décadas de trabajo constante por la no violencia, el respeto a los derechos humanos y la construcción de paz en Chiapas. Desde su fundación en 1995, en el contexto del levantamiento zapatista, SIPAZ ha evolucionado para responder a la necesidad de adaptarse a los nuevos retos que presenta el contexto y a sus constantes cambios. La experiencia acumulada en estos treinta años representa no solo una historia de compromiso, acompañamiento y memoria histórica, sino también una lección viva de cómo el acompañamiento internacional puede contribuir a fortalecer procesos locales de paz ▀

SIPAZ tiene sus raíces en el año posterior al levantamiento del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), ocurrido el primero de enero de 1994, un hecho que abrió los ojos del mundo a la situación de los pueblos indígenas de Chiapas, una realidad marcada por una profunda desigualdad social, económica y política, y por décadas de marginación, despojo y violaciones a sus derechos.

Fue en ese contexto que, en 1995, organizaciones internacionales con experiencia en paz, derechos humanos y no violencia se unieron para responder a la necesidad de una presencia internacional permanente en Chiapas, orientada a prevenir que las tensiones escalaran hacia una violencia aún mayor. Esa coalición dio origen formal a SIPAZ.

Desde sus inicios, SIPAZ se definió como una organización internacional, no violenta y políticamente independiente. Su misión ha sido clara: disuadir y prevenir la violencia sociopolítica, así como promover el respeto a los derechos humanos y la construcción de paz.

A través del acompañamiento, la difusión de información, la realización de talleres y el fortalecimiento de vín-



Acompañamiento a la colectiva Madres en resistencia en reuniones con el gobierno y la fiscalía del estado, Tuxtla Gutiérrez, septiembre de 2025
© SIPAZ

culos con organizaciones locales, nacionales e internacionales, SIPAZ ha impulsado la construcción de capacidades para la transformación no violenta de conflictos y la defensa pacífica de los derechos humanos. Este trabajo ha echado raíces profundas que permanecen en las manos de líderes comunitarios, mujeres, jóvenes y personas defensoras.

Aprendizajes tras tres décadas de caminar

Durante estos 30 años, SIPAZ ha vivido momentos desafiantes; ha aprendido, se ha adaptado y ha buscado diversas maneras de hacer frente a contextos complicados para el trabajo de la no violencia, la búsqueda de justicia y la construcción de paz.

Inicialmente, varios actores cuestionaron a SIPAZ por su acompañamiento en un contexto marcado por la presencia de un actor armado. Otros cuestionaron su enfoque no violento, al considerarlo un posible cuestionamiento al EZLN. Es importante rescatar que el posicionamiento inicial de SIPAZ fue de plena independencia política, apostando a la apertura de espacios de diálogo que permitieran destrabar la agenda y las causas estructurales del conflicto armado. Asimismo, tras el cese al fuego ocurrido doce días después del levantamiento, el EZLN desplegó estrategias esencialmente no violentas. Estas son las acciones que SIPAZ ha acompañado.

Las organizaciones de acompañamiento internacional suelen centrar su labor en personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales que trabajan por la paz. En el

caso de SIPAZ, las agresiones y amenazas impactaban a comunidades enteras, por lo que se desarrolló un modelo de presencia de observación diferente, más abarcador y con un enfoque psicosocial.

Desde los diálogos de San Andrés, pasando por la Masacre de Acteal y hasta el estallido de la violencia criminal,

SIPAZ ha buscado la grieta que permita seguir acompañando los procesos comunitarios y mantener viva la búsqueda de luz en medio del caos, una luz que ha encontrado siem-

pre en la esperanza de los pueblos y en su fuerza de lucha.

Uno de los aprendizajes más significativos de SIPAZ en sus primeros años fue la necesidad de salir del manual del acompañamiento internacional tradicional, generalmente muy centrado en la protección, para responder mejor a las especificidades del contexto y aprovechar plenamente las oportunidades existentes.

En los años noventa, más allá del espacio de las negociaciones y ante los impactos de la Guerra de Baja Intensidad (GBI), SIPAZ apostó por limitar la violencia directa en los conflictos comunitarios denominados secundarios y por transformar el contexto de violencia cultural que podía sustentarlos, a través del trabajo con actores intermedios (track 2, así como actores de base, en el marco de la estrategia multivía), mediante su eje de educación para la paz y el trabajo interreligioso.

Posteriormente, los focos rojos se multiplicaron en otras partes del país (por ejemplo, Atenco y Oaxaca), principalmente en territorios donde se impulsaban apuestas autonó-

“La experiencia acumulada en estos treinta años representa no solo una historia de compromiso, acompañamiento y memoria histórica, sino también una lección viva de cómo el acompañamiento internacional puede contribuir a fortalecer procesos locales de paz.”



micas similares a la del EZLN, las cuales fueron reprimidas de manera sistemática (presumiblemente para evitar la ampliación del fenómeno a nivel nacional). Ante este escenario, SIPAZ decidió hacerse presente en los estados de Oaxaca y Guerrero, tomando en cuenta las similitudes de estas entidades con Chiapas en cuanto a pobreza y marginación de los sectores más vulnerables de la sociedad.

De manera general, un papel primordial para SIPAZ ha sido el de observador y narrador: recopilar testimonios, documentar violaciones de derechos humanos, monitorear y producir información a través del blog, así como de informes y análisis que, en ocasiones, abren espacios de interlocución con autoridades nacionales e internacionales. En los últimos años, ha sido complicado mantener un canal de comunicación con autoridades locales y estatales, por lo que empezamos a apuntar más a un diálogo con actores internacionales para visibilizar la situación de violencia y violaciones a derechos humanos en Chiapas y para que estos puedan incidir de alguna forma en el cambio de realidades (efecto “boomerang”).

De este modo, trabajamos también para generar memoria histórica, que puede contribuir a la rendición de cuentas y a la movilización de la sociedad civil nacional e internacional a futuro.

En treinta años de trabajo de SIPAZ, hemos aprendido y sostenemos que el acompañamiento internacional puede

contribuir a la construcción de paz desde la base, sin imposiciones, respetando siempre la dignidad, las luchas y la visión

de las distintas realidades de los pueblos. En este sentido, se han empezado a abarcar temas como la migración o la defensa de la Madre Tierra, que se han consolidado como el centro de varias estrategias de defensa de los pueblos.

Retos a través de los años

SIPAZ ha buscado evolucionar en función de los cambios de contexto que ha venido monitoreando. Las formas de violencia se han diversificado. Además de los conflictos históricos, han surgido nuevas dinámicas relacionadas con el crimen organizado, el despojo territorial, la militariza-

Presentación con
jóvenes, agosto
de 2023
© SIPAZ



Acompañamiento a evento El Istmo es nuestro en Oaxaca
© SIPAZ

ción y la impunidad. Nuestra historia es también un reflejo de los desafíos persistentes que enfrenta México: desigualdad, violencia estructural y común, corrupción e impunidad.

Muy significativamente, a partir de 2006, si bien se hablaba cada vez más de “guerra en México”, tanto fuera como dentro del país, ya no se hacía referencia al conflicto armado no resuelto en Chiapas, sino a los saldos sangrientos de la violencia prevaleciente luego de la declaración de guerra de Felipe Calderón al narcotráfico desde el inicio de su sexenio. Esta estrategia, de la mano de una militarización intensa de todo el país, no solo en términos territoriales, sino extendida a todos los ámbitos de la sociedad. Asimismo, se impuso una lógica de criminalización y arrinconamiento no únicamente del EZLN, sino de la protesta social y de las personas defensoras de derechos humanos en general.

A diferencia de lo esperado, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se distanció de la sociedad civil organizada con declaraciones públicas que la deslegitimaban y desacreditaban, reforzando la de por sí extrema vulnerabilidad de las y los defensores de derechos humanos en el país. También comenzó a preocupar la tendencia desde el poder a desacreditar cualquier voz que expresara inconfor-

midad y la ausencia creciente de contrapesos. Se mantuvo una visión de seguridad centrada en una perspectiva militarizada. La creación de una Guardia Nacional continuó la política pasada de enfrentar la creciente omnipresencia del crimen organizado a través de la militarización, lamentablemente sin una mejoría significativa en las estadísticas vinculadas a la violencia.

Además, se implementó una propuesta de desarrollo que priorizaba megaproyectos, muchos de ellos extractivistas. Su planteamiento “*Primero los pobres*” mantuvo un

corte asistencialista, sin cuestionar las estructuras que favorecen el empobrecimiento de la población. Esto fue peor aún en zonas indígenas, donde estas ayudas se dieron vía tarjetas bancarias y de forma individual, lo cual generó un aún mayor divisionismo en ejidos y comunidades rurales. Finalmente, se denunció una tendencia a simular espacios de consulta sobre decisiones ya tomadas, sin respetar los derechos de los pueblos indígenas en la materia.

En lo local, se observó una nueva y fuerte militarización de la Frontera Sur, bajo la presión del presidente norteamericano Donald Trump, en el escenario de las caravanas migrantes. Un mayor cierre de la Frontera Sur (que ciertamente ya venía siendo extremadamente porosa) implicó la búsqueda de nuevas rutas (un corredor central hasta ahora poco usado), tanto para el tráfico de migrantes como para

• “El acompañamiento internacional puede contribuir a la construcción de paz desde la base, sin imposiciones, respetando siempre la dignidad, las luchas y la visión de las distintas realidades de los pueblos.”



Oaxaca
© SIPAZ

otros productos, generalizando la creciente violencia. Este hecho jugó un papel en la multiplicación e intensificación de hechos violentos que respondían a un “calentamiento de plaza” en algunas zonas que continuaron controladas o silenciadas, así como a una lucha de plaza abierta, principalmente entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, en la franja fronteriza.

Retos en la actualidad

A diferencia de la negación o minimización de lo que venía pasando a nivel federal con AMLO y la inacción o posible complicidad del gobierno del estado encabezado por Rutilio Escandón Cadenas, se percibió un cambio después de la toma de posesión del gobierno estatal de Eduardo Ramírez Aguilar en diciembre de 2024.

No obstante, El Obse, en su Segundo Informe, de enero a julio de 2025, documentó que, “pese a los discursos oficiales sobre mejoras en seguridad, la violencia —incluyendo desa-

pariciones, reclutamiento forzado y desplazamientos— persiste en muchas comunidades, manteniendo a las personas defensoras de derechos humanos en riesgo constante. Quienes trabajan en documentación, visibilización y protección enfrentan condiciones adversas que dificultan su labor y aumentan su exposición a agresiones”.

• “Una paz que no sea solo la ausencia de violencia visible,
• sino un proyecto compartido de justicia, reconciliación y
• dignidad.”

Por su parte, el “Informe Chiapas 2025: La paz pendiente” del Grupo de Trabajo Región Frontera, cuestiona el enfoque de pacificación militarizada adoptado por el Gobierno de Chiapas como respuesta a la violencia de grupos del crimen organizado. En él se señala que, “pese a la retórica oficial de reducción del conflicto, las estrategias de seguridad han profundizado la militarización y la presencia de fuerzas élite como las FRIP [Fuerzas de Reacción Inmediata Pakales], lo que ha tensionado aún más la vida social de las comunidades y aumentado casos de privación arbitraria de la libertad y desplazamientos no reconocidos”. Este panorama complica el trabajo de acompañamiento internacional, pues conlleva riesgos de seguridad para observadores, activistas y personas migrantes que transitan por la región.

En este sentido, la violencia generada por la disputa entre grupos criminales en la frontera con Guatemala no solo impacta a las poblaciones locales, sino que también dificulta el ejercicio seguro del trabajo de organizaciones internacionales y obser-

vadores. “La presencia de cuerpos de seguridad militarizados y de grupos armados crea un entorno de inseguridad que limita el acceso, la movilidad y la recolección de información confiable, exponiendo a agentes externos a riesgos físicos y jurídicos”, plantea el mismo informe.



Taller con seminaristas de la diócesis de San Cristóbal de las Casas (2022-2023)
© SIPAZ

Las marcadas diferencias entre las narrativas oficiales, que promueven una imagen de “*paz recuperada*”, y las documentadas por parte del Obse y organizaciones que registran los hechos persistentes de violencia, complican la difusión e impacto de lo documentado, a lo que se suma el surgimiento de zonas silenciadas (donde se opta por no denunciar o publicar por miedo a represalias). Esto provoca que la información crítica sea minimizada o deslegitimada por autoridades que priorizan narrativas de orden y control.

Los desafíos del acompañamiento internacional en Chiapas en la actualidad, “*en un contexto de violencia persistente, militarización, movilidad humana compleja y tensiones políticas*”, requieren nuevas estrategias. Estas deben procurar la seguridad de quienes acompañan, y también la de los acompañados, la defensa de los derechos humanos y la documentación y visibilización de violaciones a los mismos, además de la articulación entre organizaciones y la cooperación con otros organismos internacionales, todo ello mientras fortalecen las capacidades locales de organización y protección ante violaciones sistemáticas. La labor internacional no solo es urgente, sino que resulta esencial para visibilizar realidades que muchas veces quedan fuera de los discursos oficiales y para continuar acompañando a las comunidades más vulnerables en la protección de sus derechos fundamentales.

“Nuestro compromiso seguirá siendo estar allí donde la dignidad se ve amenazada, donde el silencio duele, donde la violencia acecha y donde la esperanza necesita aliados para mantener viva esa luz.”

Perspectivas para el futuro: entre memoria, esperanza y acción

Mirar hacia adelante en este 30º aniversario es un desafío y también una oportunidad para reafirmar y actualizar nuestra misión, renovar compromisos y construir nuevas rutas para la paz.

Reafirmar el compromiso por la paz verdadera

Fortalecer el trabajo en formación e información para la paz. SIPAZ considera fundamental consolidar procesos que no solo prevengan la violencia, sino que promuevan la construcción de una paz verdadera basada en la justicia.

Innovar en estrategias de acompañamiento

Ante nuevas formas de violencia, se vuelve necesario explorar nuevos modelos de acompañamiento: la combinación de acompañamiento físico y digital, monitoreo remoto, fortalecimiento de articulaciones y redes comunitarias, así como documentación y denuncia.

Memoria histórica

SIPAZ continuará recogiendo testimonios y realizando reflexiones y análisis. Seguirá alimentando la memoria desde el convencimiento de que este archivo puede ser un recurso pedagógico para las nuevas generaciones, investigadoras e investigadores, personas activistas y para procesos de reconciliación comunitaria.



Incidencia/Diplomacia para la Paz

En un momento en que muchos derechos están bajo presión, SIPAZ mantendrá su papel como actor de incidencia: visibilizando y denunciando violaciones, y colaborando con organizaciones, organismos internacionales y mecanismos de derechos humanos.

Fortalecer la protección de defensoras y defensores

Diseñar y consolidar esquemas de acompañamiento con perspectiva de género y de riesgo, en articulación con programas de seguridad legal, psicológica y comunitaria para personas defensoras. Es vital que SIPAZ integre en su estrategia de largo plazo la protección preventiva y estructural.

Información y educación

Seguir contribuyendo a que la paz no sea un concepto lejano, sino una praxis cotidiana. Integrar a más personas, incluyendo jóvenes y mujeres, en proyectos educativos de paz, diálogo y memoria, y apostar por dirigir la información a sectores más amplios de la sociedad, ampliando también los canales de difusión.

Seguir en el camino

En estos 30 años, SIPAZ ha intentado contribuir a la construcción de paz, y a sembrar esperanza. Ha ofrecido presencia en momentos críticos, ha formado y acompañado procesos locales, ha construido redes de incidencia y ha mantenido viva la posibilidad de una paz que no sea solo la

ausencia de violencia visible, sino un proyecto compartido de justicia, reconciliación y dignidad. Una paz verdadera.

Este momento de conmemoración nos interpela y nos invita a reflexionar: ¿qué significa para nosotros la paz? ¿Cómo podemos seguir contribuyendo a fortalecer esos espacios que buscan la paz con justicia y dignidad? El camino de construcción de paz es un camino largo, lleno de tensiones y retos, pero también de aprendizajes, encuentros y esperanza.

• “La paz no es un destino, sino un camino compartido que se construye paso a paso, hombro con hombro, corazón con corazón.”

Mientras nos sea posible, nuestro compromiso seguirá siendo estar allí donde la dignidad se ve amenazada, donde el silencio duele, donde la violencia acecha y donde la esperanza necesita aliados para mantener viva esa luz. Porque la paz no es un destino, sino un camino compartido.

Un camino que se construye paso a paso, hombro con hombro, corazón con corazón.

Y si algo nos han enseñado estas tres décadas, es que incluso en los territorios donde la violencia parece imponerse, siempre hay quienes creen en la posibilidad de un mundo distinto, un mundo para todos, y trabajan por ello. Es ahí donde seguimos y seguiremos encontrando la fuerza y el motivo para continuar, porque creemos que ese es un camino que vale la pena seguir recorriendo ■

Entrevista con
desplazados por la
violencia criminal
en Guerrero
© SIPAZ



Dinámica de análisis en
Encuentro de defensa
de la Madre Tierra,
septiembre de 2017
© SIPAZ



Acompañamiento a la
colectiva Madres en
resistencia en reuniones
con el gobierno y la fiscalía
del estado, Tuxtla Gutiérrez,
septiembre de 2025
© SIPAZ



Luces de esperanza Jóvenes construyendo paz en el mundo

“Imagina empezar tu día con 150 jóvenes que irradian compromiso con el cambio positivo. Cuyas experiencias colectivas e individuales de crisis y opresión superan lo que la mayoría de nosotros vemos en toda una vida. Y que transforman esto y deciden ser una fuerza para el bien”.

Benedikta Von Seherr-thoss

Este año se llevaron a cabo dos eventos relevantes para la juventud que trabaja por la construcción de paz y por una sociedad donde los derechos humanos sean una realidad, y donde se pueda vivir una vida digna y libre de violencias. Estos eventos, en los cuales SIPAZ tuvo el privilegio de participar durante el mes de noviembre, fueron el Foro por la Paz en París y la Segunda Conferencia de Jóvenes por la Paz y la Seguridad en Bruselas ■

Foro por la Paz en París: reinventando la diplomacia en un mundo en cambio

Desde hace 8 años, el Foro ha sido una plataforma que busca compartir respuestas de múltiples actores en favor de la paz global y la prosperidad sostenible. En este espacio se reúnen los principales tomadores de decisiones con el objetivo de fomentar la colaboración entre gobiernos, organizaciones internacionales, empresas y sociedad civil; se parte de la premisa de que la diplomacia no debe quedarse únicamente en la palabra, sino reinventarse para atender las necesidades de un mundo en constante cambio.

Este espacio es de gran valor, ya que permite que las diferentes opiniones de más de 300 participantes de diversos países confluyan de una forma respetuosa y constructiva, con el objetivo de cerrar las brechas Norte-Sur y Este-Oeste en la gobernanza global.

SIPAZ participó en un espacio en el que se reflexionó sobre cómo empo-

derar a las redes juveniles para defender la democracia y la paz global. Ello partiendo del hecho de que las y los jóvenes representan más del 40 % de la población mundial y serán quienes definan la futura gobernanza global.

La conversación destacó por qué los jóvenes están especialmente posicionados para actuar como catalizadores del cambio: su capacidad para generar confianza a través de divisiones, aprovechar herramientas digitales para la defensa de causas y actuar de manera rápida a través de canales informales. También se enfatizó el papel de las redes juveniles como amplificadoras de la acción colectiva, incluyendo puntos de vista críticos sobre por qué la democracia no necesariamente está ofreciendo beneficios tangibles en términos de empleo y oportunidades de participación para incidir en sus sociedades.

En nuestra intervención destacamos que, para los jóvenes, la paz es más que la ausencia de conflicto. La paz es justicia, oportunidad y dignidad. Es el momento en que los jóvenes pueden expresar su verdad sin mie-

*“Segunda conferencia de juventud paz y seguridad”, Bruselas, Bélgica, noviembre de 2025
© SIPAZ*

Foro de Paz en
París, Francia,
noviembre
de 2025
© SIPAZ



do, y cuando todas las personas son tratadas con respeto, sin importar su origen, condición social o género. Los ejemplos que se presentaron mostraron que los jóvenes en América Latina están comprometidos con la construcción de una sociedad libre de violencia y en la que la dignidad sea común.

Las redes multiplican este impacto al proporcionar espacios seguros, un sentido de solidaridad y confianza. Como señaló nuestra representante: *"En la Alianza Global para la Prevención de Conflictos Armados, también conocida como GPPAC, la red global más grande de constructores de paz locales de la que soy miembro, hemos visto cómo conectar a los jóvenes a nivel local, nacional y global fortalece capacidades, fomenta el aprendizaje entre pares y les permite influir en políticas y prácticas arraigadas en realidades locales. Las redes proporcionan apoyo emocional, espacios seguros para colaborar y amplifican el alcance de las iniciativas locales. Inspiran a los jóvenes a seguir trabajando por la justicia, sabiendo que no están solos".*

"Segunda Conferencia de Juventud, Paz y Seguridad", Bruselas - 2025

En 2018, la resolución 2419 del Consejo de Seguridad de la ONU solicitó la inclusión real y plena de los jóvenes en la negociación e implementación de los acuerdos de paz, así como en los espacios de toma de decisiones. En 2020, la resolución 2535 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estableció los pasos pertinentes para la implementación de la agenda "Juventud, Paz y Seguridad" (JPS) en el marco de las operaciones de paz de las Naciones Unidas. Ese mismo año, el Consejo de Seguridad reconoció, en su Resolución 2553, el vínculo que existe entre la reforma del sector de la seguridad y la Juventud, la Paz y la Seguridad, subrayando que las y los jóvenes deben participar en las iniciativas de consolidación de la paz orientadas a la reforma de dichos sectores.

Es en este contexto que 150 jóvenes, procedentes de 80 países, se reunieron

durante una semana para conversar, intercambiar experiencias, compartir desafíos y oportunidades para la juventud a nivel global (leer *Declaración conjunta sobre Juventud, Paz y Seguridad - Documento final de la Segunda Conferencia de la Unión Europea sobre Juventud, Paz y Seguridad*).

Fue impresionante constatar, una vez más, la diversidad de trayectorias y realidades presentes, a partir de la cual destacaremos algunas formas en que jóvenes de distintos territorios están siendo artesanas y artesanos de la paz.

Organización Afganos por el Pensamiento Progresista (APT), Afganistán

Es una organización sin fines de lucro dirigida por jóvenes, que trabaja en Afganistán para abordar activamente las crisis de derechos humanos, con un enfoque específico en los derechos de las mujeres, al tiempo que promueve el acceso de las niñas a la educación mediante iniciativas creativas e impactantes.

MAG International, Bosnia

La organización encuentra y destruye minas terrestres, municiones de racimo y bombas sin explotar en territorios afectados por el conflicto. También trabaja para limitar las causas y abordar las consecuencias de la violencia armada en las comunidades. Desde 1989, ha ayudado a más de 20 millones de personas en 70 países.

Educar, empoderar e inspirar por la paz, Filipinas

Invierte en las personas jóvenes a través de subvenciones iniciales otorgadas a organizaciones juveniles con ideas prometedoras para la paz y el progreso. Desde 2020, ha proporcionado apoyo financiero a 24 organizaciones juveniles cuyos programas han llegado a miles de personas en todo Filipinas.

Paz Sostenible, Italia

Empoderan a jóvenes mujeres y hombres, brindándoles las herramientas para hacerse oír su voz y conec-





tándolos con responsables políticos. Organizan conferencias con activistas de derechos humanos, políticos y especialistas. Promueven campañas de sensibilización, formaciones, seminarios web y eventos, y publican investigaciones para crear una cultura de diálogo más segura y sostenible entre las personas a nivel transnacional.

Conectar la ciencia con las personas y la política a través de la innovación, Nepal

Busca aprovechar la tecnología y la innovación para generar impacto social. La organización surgió como respuesta a la creciente necesidad de soluciones basadas en datos en ámbitos como la reducción del riesgo de desastres, la adaptación al cambio climático, la gobernanza y el uso de datos abiertos. Empodera a jóvenes, fomenta el voluntariado y aprovecha herramientas digitales para abordar algunos de los desafíos más urgentes en Nepal y más allá.

Dame un Chance, Panamá

Es una iniciativa juvenil que cree que todos los jóvenes, aun en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y violencia, si cuentan con las oportunidades adecuadas, pueden convertirse en ciudadanos comprometidos, sin importar el lugar donde crecieron ni su pasado. Trabaja con jóvenes mediante talleres socioemocionales en distintos

centros de custodia y cumplimiento de menores a nivel nacional.

Jovenarte, México

Jóvenes articulando territorios, organización creada en 2012 frente a un contexto creciente de adicciones y violencia, para promover la cultura de paz y el ejercicio de los derechos culturales de jóvenes indígenas migrantes en el sur de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Al finalizar la conferencia, las y los jóvenes ratificaron que su participación es fundamental en las iniciativas de transformación en sus territorios. Aunque no existe una definición conjunta de lo que significa la paz, las y los jóvenes coinciden en querer una vida

digna y libre de violencia para todas las personas. La diversidad no tiene que ser una debilidad; puede ser una gran oportunidad para construir paz desde la creatividad. En medio del caos, existen luces de esperanza, caminos de paz y quienes trabajan día a día por la construcción de un mundo más justo ■

*“Segunda conferencia de juventud paz y seguridad”, Bruselas, Bélgica, noviembre de 2025
© SIPAZ*



PRESENCIA INTERNACIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO

CHIAPAS

AGOSTO

- Asistimos al evento en el que la organización Colibres Movilidades Libres y Elegidas presentó su informe *"Caminos Vigilados: vigilancia digital de personas en movilidad y personas defensoras en la frontera Sur de México"*.
- Asistimos al Foro *"La desaparición de personas y el deber del Estado en la búsqueda y localización"*, convocado por la Cruz Roja Internacional, que se llevó a cabo en San Cristóbal de Las Casas.
- Participamos en el evento convocado en Tuxtla Gutiérrez por el Grupo de Trabajo Contra la Desaparición en Chiapas, donde colocaron fotografías, fichas de búsqueda, flores y veladoras frente al Palacio de Gobierno, y en el que señalaron que *"a diferencia de otras regiones de América Latina, en México la desaparición de personas no es un problema del pasado, sino una crisis que se agudiza año tras año"*.
- Acompañamos la marcha organizada por la colectiva Madres en Resistencia que se realizó en Tuxtla Gutiérrez en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

SEPTIEMBRE

- Participamos en el quinto Encuentro *"Jornadas regionales: Por el Derecho a la Verdad, Justicia y Reparación"* de familiares de personas desaparecidas que se llevó a cabo en San Cristóbal de Las Casas.
- Estuvimos presentes, en dos ocasiones, en el plantón organizado por la colectiva Madres en Resistencia frente a la fiscalía del Estado para exigir cumplimiento de una serie de acuerdos.
- Acompañamos como observadores a la colectiva Madres en Resistencia en reuniones con el gobierno y la fiscalía del Estado.

OCTUBRE

- Estuvimos presentes en las actividades en las que fue develada una placa con el nombre del indígena chol Antonio González Méndez, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), ubicada en San Cristóbal de Las Casas. Antonio González Méndez había sido base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)

y fue desaparecido en el municipio de Sabanilla en 1999.

- En el marco del Día Internacional de la Niña, asistimos a la acción colectiva *"Tejiendo nuevas prácticas de cuidado colectivo"*, convocada por Melel Xojobal, y protagonizada por niñas y adolescentes.
- Acompañamos en San Andrés Larraínzar las actividades convocadas para conmemorar el primer aniversario del asesinato del sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez y seguir exigiendo justicia en su caso.
- El Día de Muertos asistimos a *"La Muerte Impune"*, acción pública organizada por Melel Xojobal para denunciar la muerte y hacer presentes a los niños, niñas y adolescentes que *"no debieron morir"* por la violencia, la negligencia y la impunidad en Chiapas.
- Acompañamos la instalación de un altar en San Cristóbal de las Casas, levantado por decenas de simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), para recordar *"a quienes dieron su vida por la dignidad, la tierra y la libertad"*.

INFORMACIÓN Y FORMACIÓN HACIA LA ACCIÓN RELACIONES PÚBLICAS

- En noviembre, junto con una Misión Civil de Observación conformada por europarlamentarias y varias organizaciones de Europa, sostuvimos reuniones con integrantes del Instituto Nacional de Migración y de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, en encuentros que se llevaron a cabo en Tapachula. También visitamos la Estación Migratoria Siglo XXI.

- Igualmente, en noviembre, a invitación de la Unión Europea, participamos en la Segunda Conferencia *"Juventud, Paz y Seguridad"*, organizada en Bruselas, Bélgica.

EDUCACIÓN PARA LA PAZ AGOSTO

- Compartimos un análisis con mujeres artesanas que participan en el colectivo Mujeres de Maíz, provenientes de varios municipios de Los Altos y la Selva Norte.
- Ofrecimos una presentación de contexto a las y los nuevos colaboradores del programa alemán Welthaus.

SEPTIEMBRE

- Participamos con una ponencia en los eventos organizados en el marco del 20º aniversario de la Escuela de Paz de Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ) en la Ciudad de México.
- Conjuntamente con otras organizaciones civiles, facilitamos un taller con representantes de la parroquia de Las Margaritas.

OCTUBRE

- Compartimos un análisis con mujeres artesanas que participan en el colectivo Mujeres de Maíz, provenientes de varios municipios de Los Altos y la Selva Norte.

NOVIEMBRE

- Compartimos un análisis con integrantes del *"Núcleo"*, instancia de análisis de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas.

ARTICULACIÓN

- Con una frecuencia mínima mensual, asistimos a reuniones plenarias y de comisiones de la articulación por la Paz en Chiapas, Slamalil Kinal. En octubre, junto con los integrantes de dicha plataforma, co-convocamos y co-facilitamos un encuentro de organizaciones de la sociedad civil que contó con la presencia de alrededor de 80 personas.
- De forma bimensual, asistimos a reuniones operativas del Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia (MPPJ).
- Mantuvimos varias reuniones con organizaciones que colaboran en el proyecto titulado *"Fortalecimiento de las capacidades de autoprotección de las organizaciones defensoras de derechos humanos y comunidades de Chiapas"*, el cual coordinamos con Voces Mesoamericanas y Huridocs. En noviembre, El Obse publicó un nuevo informe abarcando el primer semestre de 2025.
- Como parte de los integrantes de la Plataforma por la construcción de la paz en México, participamos en reuniones mensuales de análisis y reflexiones basadas en el intercambio de buenas prácticas. En octubre, co-ordinamos y participamos en un encuentro de dicha plataforma, realizado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En el marco de este evento, se realizó una conferencia de prensa con representantes de la Plataforma, donde denunciaron la discrepancia entre el discurso oficial sobre la

"paz" y la realidad que se vive en Chiapas y en todo el país.

- En agosto, participamos en el Tercer Encuentro Presencial de la comunidad de aprendizajes de protección física, *"Intercambiando saberes para la protección física de personas, colectivos y comunidades que promueven y defienden Derechos Humanos en América Latina"*, en San José, Costa Rica.
- En agosto y noviembre, participamos en un espacio de análisis sobre seguridad en San Cristóbal de Las Casas, con la participación de varias organizaciones que se ubican o trabajan en dicha ciudad.
- En septiembre, octubre y noviembre, participamos en una reunión con representantes de las zonas pastorales pertenecientes a la Comisión de Seguimiento del Congreso de la Madre Tierra, componente de la pastoral social de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.
- En octubre, participamos en una reunión de las copartes de la Plataforma Global para la prevención de los conflictos armados (GPPAC por sus siglas en inglés).
- En noviembre, participamos en la preparación y realización de una Misión Civil de Observación conformada por europarlamentarias y varias organizaciones de Europa, coordinada por la Plataforma por la Paz y los derechos humanos México-Unión Europa, la cual visitó varios estados de México, incluido Chiapas.
- En octubre, participamos en el Foro por la Paz en París, Francia, en el panel *"Fortalecimiento de las redes juveniles para defender la paz y la democracia global"*.
- En noviembre, participamos en el Encuentro de constructores y constructoras de Paz, que se realizó en la comunidad Siberia, municipio de Chanal, por invitación de la Comisión de Apoyo a la Unidad Comunitaria y la Reconciliación (CORECO) ■

